

“Téngase por recibido el recurso de revisión presentado por ***** **, el veintitrés de septiembre de dos mil dieciséis.

...
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 150, fracción I, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 156, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, tórnese el presente asunto al Comisionado Ponente ...veintitrés de septiembre de dos mil dieciséis.”

“Ciudad de México, a dos de diciembre de dos mil dieciséis.

...
ÚNICO. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 150, fracciones V y VII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince; así como, y 156, fracciones VI y VIII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, se decreta el cierre de instrucción del Expediente del recurso de revisión ***
***** **

De lo que se sigue, que las porciones normativas en comentario sí fueron aplicadas en el procedimiento de revisión e incluso citadas por la autoridad.

Por lo que toca a las fracciones II, III y IV del mismo dispositivo, y pese a que no fueron citadas expresamente durante el trámite del aludido recurso también se advierte su aplicación, dado que por auto de treinta de septiembre de dos mil dieciséis²³, se admitió a trámite dicho medio de impugnación, se integró el expediente respectivo, y se puso a disposición de las partes para que dentro del plazo de siete días hábiles manifestaran lo que a su interés conviniera —fracción II—; asimismo, se observa que se tuvieron por hechas las manifestaciones y recibidas las pruebas del sujeto obligado y de los aquí solicitantes de amparo²⁴ —fracción III—; también se advierte que por acuerdo de dieciocho de octubre de

²³ Folio 8 del legajo de pruebas.

²⁴ Folios 13 y 35 del legajo de pruebas.

dos mil dieciséis se citó a comparecer al ***** ***** **
***** ***** ***** , a fin de que exhibiera la documentación
que atendiera a la solicitud de información —fracción IV—.

El veintisiete de octubre de dos mil dieciséis²⁵, se levantó el
acta con motivo de la audiencia ordenada en el acuerdo de
dieciocho de octubre citado en último término, cuyo contenido pone
en evidencia la aplicación del arábigo 147 de la Ley General en
controversia, en tanto que revela que los Comisionados tuvieron
acceso a la información clasificada, dado que fue exhibida por el
***** ***** ** ***** ***** *****

Y por lo que hace al artículo 149, del considerando cuarto de la
resolución de siete de diciembre de dos mil dieciséis, se conoce que
al resolver el recurso de revisión, el Instituto advirtió una colisión de
derechos; a saber, el de la información y el de la protección a los
datos de las operaciones bancarias, y que para resolverlo aplicó una
prueba de interés público con base en elementos de idoneidad,
necesidad y proporcionalidad.

Por tanto, como se adelantó, queda en evidencia que durante
el trámite y solución del recurso de revisión *** ***** sí se
aplicaron en perjuicio de los quejosos los artículos 147, 149 y 150,
fracciones I, II, III, IV, V y VII, de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, pese a que no hubieran sido
invocados expresamente.

No es óbice a lo así decidido, que la autoridad haya citado
como fundamento de su actuar diversos preceptos de la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, cuyo contenido
es en esencia el mismo que el de los numerales indicados en el
párrafo que antecede, pues como se mencionó en párrafos
precedentes, el recurso de revisión ante el Instituto se rige **por lo**

²⁵ Folio 26 del legajo de pruebas.



establecido en el Capítulo I del Título Octavo de la Ley General y por las disposiciones del Capítulo III, del Título Quinto de la Ley Federal, tantas veces citadas; de ahí que puede estimarse que las disposiciones respectivas conforman un sistema susceptible de impugnarse conjuntamente a través del juicio de amparo.

En el entendido de que quienes resuelven no advierten la aplicación de la fracción VI, del artículo 150 de la Ley General que nos ocupa²⁶, dado que del expediente no se ve que el sujeto obligado hubiera presentado información una vez cerrada la instrucción, de modo que debe confirmarse el sobreseimiento respecto de esa porción normativa.

Tampoco es obstáculo a la decisión que antecede, la conclusión hecha por el resolutor federal, en el sentido de que *“...en el contexto actual, las disposiciones relativas al procedimiento y términos en los que habrá de verificarse el trámite de las solicitudes de información es el contemplado en la Ley Federal de Acceso a la Información Pública y Gubernamental y su Reglamento”*, pues de los transitorios segundo y tercero, respectivamente, de la Ley Federal y de la Ley General de referencia, a los que aludió no se advierte tal conclusión, ni el *A quo*, hizo mayor exposición al respecto.

Por otra parte, por lo que toca al “Acuerdo Mediante el cual se Confieren Funciones a los Secretarios de Acuerdos y Ponencia para Coadyuvar con los Comisionados Ponentes en la Sustanciación de los Medios de Impugnación Competencia del Instituto, Establecidos en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información

²⁶ **“Artículo 150.** Los Organismos garantes resolverán el recurso de revisión conforme a lo siguiente:

...

VI. El organismo garante no estará obligado a atender la información remitida por el sujeto obligado una vez decretado el cierre de instrucción, y;

...”

Pública y en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública,” debe decirse que de los proveídos de treinta de septiembre, dieciocho y veintiocho de octubre, todos de dos mil dieciséis, también se advierte su aplicación, pues además de que se invocó expresamente como fundamento, esas actuaciones fueron suscritas precisamente por Secretarios de Acuerdos y Ponencia de Acceso a la Información, conforme a lo autorizado en la aludida disposición de observancia general reclamada.

En el contexto descrito, al no surtirse el motivo de improcedencia invocado por el juez para sobreseer en el juicio, no existir diversos propuestos por las partes que deban examinarse, ni advertirse otro de oficio respecto de los artículos 147, 149 y 150, fracciones I, II, III, IV, V y VII, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y del **Acuerdo Mediante el cual se Confieren Funciones a los Secretarios de Acuerdos y Ponencia para Coadyuvar con los Comisionados Ponentes en la Sustanciación de los Medios de Impugnación Competencia del Instituto, Establecidos en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo procedente es revocar el sobreseimiento recurrido por lo que a éstos respecta.**

Por lo demás, al no haber diversas causas de improcedencia propuestas por las partes pendientes de estudio, y dado que este Tribunal no advierte oficiosamente la actualización de alguna respecto de los artículos 153, 155 y 156 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, **por lo que procede declarar agotado el estudio de procedencia del juicio constitucional materia de revisión.**

SÉPTIMO. Competencia originaria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Los suscritos consideran que en la presente



instancia subsisten los temas de constitucionalidad respecto de los artículos 153, 155 y 156 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 147, 149 y 150, fracciones I, II, III, IV, V y VII, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, sobre los que este Tribunal no puede resolver en términos de la facultad delegada que le corresponde.

En efecto, como se narró antes, en el Considerando Séptimo de la sentencia recurrida, el secretario en funciones de Juez, calificó de infundados e inoperantes los conceptos de violación propuestos por la solicitante de amparo en contra de la discusión, aprobación y expedición de los artículos 153, 155 y 156 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, tras considerar que no violan los derechos humanos de audiencia y defensa efectiva, y por ende las formalidades esenciales del procedimiento, previstos en el artículo 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni los derechos a la vida privada, intimidad, propiedad de datos personales, a la secrecía de los documentos e información y a la seguridad jurídica.

Por su parte, en el tercer agravio del recurso de revisión, los disconformes insisten, medularmente, en que tales disposiciones sí son transgresoras de derechos humanos.

Asimismo, en el quinto concepto de violación de la demanda de amparo, se expusieron diversos argumentos tendentes a demostrar la inconstitucionalidad de los artículos 147, 149 y 150, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los cuales no fueron analizados por el *A quo*, pero que merced del sobreseimiento levantado respecto de esos preceptos, deben ahora ser examinados.

Ahora bien, de los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la



de amparo se hubiese impugnado una ley federal, local, del Distrito Federal, o un tratado internacional, por estimarlos directamente violatorios de un precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; (...).”

Las disposiciones precitadas se complementan con el Acuerdo General 5/2013 de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, en específico, su punto Segundo, fracción III, que establece:

“SEGUNDO. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación conservará para su resolución: (...)

III. Los amparos en revisión en los que subsistiendo la materia de constitucionalidad de leyes federales o tratados internacionales, no exista precedente y, a su juicio, se requiera fijar un criterio de importancia y trascendencia para el orden jurídico nacional y, además, en el caso de los interpuestos contra sentencias dictadas por los Tribunales Colegiados de Circuito, revistan interés excepcional; o bien, cuando encontrándose radicados en una Sala así lo acuerde ésta y el Pleno lo estime justificado;...”

De igual forma, precisa señalar que mediante el Acuerdo General 5/2013, precitado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación delegó a favor de los Tribunales Colegiados de Circuito su competencia originaria para resolver ciertos recursos de revisión, tal como se corrobora con lo dispuesto en el punto Cuarto, fracción I, incisos A), B), C) y D), que dice:

“CUARTO. De los asuntos de la competencia originaria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con las salvedades especificadas en los Puntos Segundo y Tercero de este Acuerdo General, corresponderá resolver a los Tribunales Colegiados de Circuito: I. Los recursos de revisión en contra de sentencias pronunciadas por los Jueces de Distrito o los Tribunales Unitarios de Circuito, cuando:

A) No obstante haberse impugnado una ley federal o un tratado internacional, por estimarlos directamente violatorios de un precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o se hubiere planteado la interpretación directa de uno de ellos, en la sentencia recurrida no se hubiere abordado el estudio de esas cuestiones por haberse sobreseído en el juicio o habiéndose pronunciado sobre tales planteamientos, en los agravios se hagan valer causas de improcedencia.

Lo anterior se concretará sólo cuando el sobreseimiento decretado o los agravios planteados se refieran a la totalidad de los quejosos o de los preceptos impugnados, y en todos aquellos asuntos en los que la materia de la revisión no dé lugar a que, con independencia de lo resuelto por el Tribunal Colegiado de Circuito, deba conocer necesariamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación;

B) En la demanda se hubiere impugnado una ley local, un reglamento federal o local, o cualquier disposición de observancia general, salvo aquéllos en los que el análisis de constitucionalidad respectivo implique fijar el alcance de un derecho humano previsto en tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, respecto del cual no exista jurisprudencia del Pleno o de las Salas de este Alto Tribunal, sin menoscabo de que la Sala en la que se radique el recurso respectivo determine que su resolución corresponde a un Tribunal Colegiado de Circuito;

C) Habiéndose planteado la inconstitucionalidad de leyes federales, subsista la materia de constitucionalidad de éstas, y exista jurisprudencia del Pleno o de las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y

D) Los amparos en revisión en los que, sobre el tema debatido, se integre, aunque no se haya publicado, jurisprudencia del Pleno o de las Salas; o cuando existan tres precedentes emitidos indistintamente por el Pleno o las Salas, en forma ininterrumpida y en el mismo sentido, y no se hubiere alcanzado votación idónea para integrar jurisprudencia...”.

Así, en síntesis la competencia originaria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para conocer de los recursos de revisión interpuestos en contra de las sentencias dictadas por los Jueces de Distrito en los juicios de amparo indirecto se actualiza, siempre y cuando se materialicen las siguientes hipótesis:

1. Cuando habiéndose impugnado en la demanda de amparo normas generales por estimarlas directamente violatorias de la



Constitución, subsista en el recurso el problema de constitucionalidad; y,

2. Que sobre el tema debatido no se integre jurisprudencia del Pleno o de las Salas, aunque no se haya publicado; o que no existan tres precedentes emitidos indistintamente por dichos órganos en forma ininterrumpida y en el mismo sentido, aun cuando no se hubiere alcanzado votación idónea para integrar jurisprudencia.

Atento a lo anterior, este Tribunal estima que el asunto debe ser enviado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya que:

a) Subsiste el problema de constitucionalidad planteado respecto de dos leyes federales; a saber, de los artículos 153, 155 y 156 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 147, 149 y 150, fracciones I, II, III, IV, V y VII, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública;

b) De la búsqueda en el Semanario Judicial de la Federación efectuada vía electrónica, conforme al Acuerdo General 19/2013, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se advierte que no existe jurisprudencia sobre la temática planteada en relación con las leyes reclamadas.

c) Del módulo de consulta de expedientes del Máximo Tribunal del país, examinado a través de la página oficial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se observa que **no existen tres** precedentes emitidos por el Pleno o las Salas indistintamente, en forma ininterrumpida y en el mismo sentido en relación con la temática planteada por la parte quejosa en sus conceptos de violación, aun cuando no hubieran alcanzado la votación idónea para ser jurisprudencia.

Ello, pues a la fecha en que se emite esta ejecutoria, únicamente se localizaron **dos** precedentes sobre el tema; a saber, los amparos

Protección de Datos y Secretaría de Acuerdos y Ponencia de Acceso a la Información, todos del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, acorde con lo expuesto en los considerandos quinto y sexto de esta ejecutoria.

SEGUNDO. Remítanse los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para lo que tenga a bien determinar respecto de la constitucionalidad de los artículos 153, 155 y 156 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 147, 149 y 150, fracciones I, II, III, IV, V y VII, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, impugnados como sistema normativo, con motivo de su acto de aplicación.

Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y por medio de oficio a las autoridades responsables; con testimonio de esta resolución remítanse los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, enviándole el archivo que la contenga por medio del correo oficial; comuníquese lo anterior al Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México; y fórmese cuaderno de antecedentes.

Así, por unanimidad de votos, lo resolvieron y firman los Magistrados Arturo Iturbe Rivas (Presidente), Óscar Palomo Carrasco (Ponente) y Rolando González Licon, integrantes del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, ante la Secretaría de Acuerdos, quien autoriza y da fe.

MAGISTRADO PRESIDENTE:

(FIRMA)

ARTURO ITURBE RIVAS.

MAGISTRADO PONENTE:

(FIRMA)

ÓSCAR PALOMO CARRASCO.

MAGISTRADO:

(FIRMA)

ROLANDO GONZÁLEZ LICONA.

SECRETARIA DE ACUERDOS:

(FIRMA)

JAZMÍN ARELLANO MENDOZA.

LA SECRETARIA DE ACUERDOS DEL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO **HACE CONSTAR** QUE ESTA ES LA ÚLTIMA FOJA DE LA EJECUTORIA DICTADA EN EL EXPEDIENTE RELATIVO AL R.A. 20/2020, EN EL QUE SE RESOLVIÓ: **“PRIMERO.** *Se sobresee en el juicio por lo que hace a la discusión, aprobación, expedición, refrendo y publicación de la fracción VI, del artículo 150 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el cuatro de mayo de dos mil quince en el Diario Oficial de la Federación, atribuidos respectivamente a la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, ambos del Congreso de la Unión, al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, al Secretario de Gobernación y Director del Diario Oficial de la Federación; a los acuerdos de treinta de septiembre, dieciocho y veintiocho de octubre de dos mil dieciséis, dictados en el expediente ***** del índice del Instituto Nacional de Transparencia de Datos Personales, y al acta de veintisiete de octubre de dos mil dieciséis, atribuidos al Subdirector de Resoluciones de Acceso a la Información “B”; Jefe de Departamento de Análisis de Acceso a la Información “A”; Proyectista de Protección de Datos “B”; Secretario de Acuerdos y Ponencia de Datos Personales; Subdirector de Resoluciones de Protección de Datos y Secretaria de Acuerdos y Ponencia de Acceso a la Información, todos del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, acorde con lo expuesto en los considerandos quinto y sexto de esta ejecutoria. --- SEGUNDO.* *Remítanse los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para lo que tenga a bien determinar respecto de la constitucionalidad de los artículos 153, 155 y 156 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 147, 149 y 150, fracciones I, II, III, IV, V y VII, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, impugnados como sistema normativo, con motivo de su acto de aplicación.” CIUDAD DE MÉXICO, VEINTICUATRO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTE. CONSTE.*

SECRETARIA DE ACUERDOS.

(FIRMA)

JAZMÍN ARELLANO MENDOZA.



LA SECRETARIA DEL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO **CERTIFICA**; QUE LAS CONSTANCIAS QUE ANTECEDEN CONSTANTES DE **VEINTIDÓS FOJAS** ÚTILES, SON FIEL REPRODUCCIÓN DE LA EJECUTORIA DICTADA EL VEINTICUATRO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTE, EN EL R.A. 20/2020, EN EL QUE SE RESOLVIÓ: "**PRIMERO**. *Se sobresee en el juicio por lo que hace a la discusión, aprobación, expedición, refrendo y publicación de la fracción VI, del artículo 150 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el cuatro de mayo de dos mil quince en el Diario Oficial de la Federación, atribuidos respectivamente a la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, ambos del Congreso de la Unión, al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, al Secretario de Gobernación y Director del Diario Oficial de la Federación; a los acuerdos de treinta de septiembre, dieciocho y veintiocho de octubre de dos mil dieciséis, dictados en el expediente ***** del índice del Instituto Nacional de Transparencia de Datos Personales, y al acta de veintisiete de octubre de dos mil dieciséis, atribuidos al Subdirector de Resoluciones de Acceso a la Información "B"; Jefe de Departamento de Análisis de Acceso a la Información "A"; Proyectista de Protección de Datos "B"; Secretario de Acuerdos y Ponencia de Datos Personales; Subdirector de Resoluciones de Protección de Datos y Secretaria de Acuerdos y Ponencia de Acceso a la Información, todos del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, acorde con lo expuesto en los considerandos quinto y sexto de esta ejecutoria. --- **SEGUNDO**. Remítanse los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para lo que tenga a bien determinar respecto de la constitucionalidad de los artículos 153, 155 y 156 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 147, 149 y 150, fracciones I, II, III, IV, V y VII, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, impugnados como sistema normativo, con motivo de su acto de aplicación". CIUDAD DE MÉXICO, DIECIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTE.*

SECRETARIA.

JAZMÍN ARELLANO MENDOZA

JAZMIN ARELLANO MENDOZA
70.68.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.09.55
2023-08-18 14:44:02

Evidencia Criptográfica – Transacción

Archivo Firmado: 00150000263173100005005.docx

Autoridad Certificadora: Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante(s):

Firmante	Nombre:	JAZMIN ARELLANO MENDOZA	Validez:	OK	Vigente
Firma	# Serie:	706a6620636a66000000000000000000000000000000010955	Revocación	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	22/09/2020T01:00:01Z / 21/09/2020T20:00:01-05:00	Status:	OK	Valida
	Algoritmo:	Sha256withRSA			
	Cadena de Firma:	a4 8c 74 b6 58 6c 7f 78 38 72 8a 2b 3e 6c 72 11 ae 72 e8 53 78 eb 3a 57 c1 b9 1e 79 e0 68 91 20 a9 e7 fc a0 1b b3 af a5 11 c0 60 20 15 94 90 45 a0 e6 01 04 8a 39 6a 02 48 e5 17 c5 ff 9a bf 40 d4 1e f8 b9 9c a1 84 33 72 9c ed 6c 5c bf 97 3e 93 79 1e 8b 06 6d 2b 83 ad f9 35 35 d9 51 58 6b 30 48 a6 c9 18 cf 5c ca 76 d5 a2 d4 c3 d3 59 25 df 65 1f db 1c 76 00 88 a6 e6 c8 e0 03 df 58 06 9c b3 ae 44 cf 62 fc ef b1 07 11 3d 2a 3f 58 4a 56 69 a7 62 1d df 18 f1 a7 63 b7 80 d5 dd 69 1a d8 b5 c5 14 0c 11 d1 47 5a ed 69 5a 81 c4 e7 dd bc 75 b4 44 ff 55 57 60 56 00 d4 ea f9 88 31 cb e4 47 51 67 c6 0c 97 bd 08 bf 34 62 b3 68 65 35 ae 85 4f 4b 32 d5 64 14 53 80 43 b8 df 44 cf 86 02 d4 ce 45 44 67 bf 1c fa 2f 9b a0 63 25 fd 08 44 3b 04 8a 2e 12 a2 62 7e c4 cd 9f 6e a1 3b 65			
OCSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	22/09/2020T01:00:00Z / 21/09/2020T20:00:00-05:00			
	Nombre del respondedor:	OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
	Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
	Número de serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02			

Archivo firmado por: JAZMIN ARELLANO MENDOZA
 Serie: 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.09.55
 Fecha de firma: 22/09/2020T01:00:01Z / 21/09/2020T20:00:01-05:00
 Certificado vigente de: 2020-08-18 14:44:02 a: 2023-08-18 14:44:02

El veintiuno de septiembre de dos mil veinte, la licenciada Jazmín Arellano Mendoza, Secretario de Tribunal, con adscripción en el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, hago constar y certifico que en esta versión pública no existe información clasificada como confidencial o reservada en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Conste.

PJF - Versión Pública